

Fecha Sanción 28 Dic. 2001
Publicado en Boletín Oficial B.O.Nº 3/02 PAG. Nº 46/8.-
Extracto ORGANISMOS PUBLICOS RENEGOCIARAN CONTRATOS DE LOCACIONES DE INMUEBLES Y OTROS.-

San Fernando del Valle de Catamarca, 28 de Diciembre de 2001.

VISTO:

La Ley Nº 5.053 por la que se prorroga la vigencia de la Emergencia Económica que se dispusiera por la Ley Nº 4.989, y

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de lo previsto por el Artículo 1º de la Ley 5.053, las disposiciones de la Ley 4.989 tendrán vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2003.

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 4.989 faculta a los organismos públicos vinculados por contratos de locación de inmuebles, muebles y servicios, celebrados con anterioridad a la sanción de la misma, a renegociar los contratos respectivos y reprogramar los plazos de modo de ajustar su ejecución a las disponibilidades financieras del Estado provincial.

Que, el artículo 5º de la citada ley encomienda al Comité de Seguimiento y Control del Gasto Público, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la formulación de proyectos de reconversión, reforma y restricción o supresión de las unidades orgánicas centrales, descentralizadas y autárquicas de la Administración Pública provincial, de modo tal de obtener su adecuación a la situación económico financiera y que dicho Comité está compuesto básicamente por los Sres. Ministros que componen el Gabinete provincial.

Que, en su artículo 6º la Ley 4989 faculta al Poder Ejecutivo a disponer modalidades excepcionales en los regímenes de empleo en las distintas áreas de la Administración Central, Descentralizada y Entidades Autárquicas, indicando que las políticas que se adopten respecto de los recursos humanos de la Administración, propenderán a obtener la mejor asignación del gasto público en estricta correspondencia con la situación financiera provincial, garantizando la prestación de los servicios esenciales y respetando el principio de igual remuneración por igual tarea.

Que se hace necesario que los organismos descentralizados y entes autárquicos informen a la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública todas las contrataciones de servicios personales, en orden a asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 4989.

Que, dados los cambios operados en la relación fiscal nación-provincia acaecidos en los últimos meses, se produjo una mera considerable de las transferencias hacia las provincias de los recursos que recauda el Gobierno Federal, situación que ha sido formalizada mediante la reciente suscripción de la Segunda Addenda al Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscripto entre la Provincia y el Estado nacional con fecha 8 de Noviembre de 2001, que ha impactado fuertemente en las finanzas del ejercicio 2001 y también lo hará en los próximos ejercicios 2002 y 2003.

Que, en consecuencia, el Estado Provincial ya no se encuentra en condiciones de seguir cubriendo con recursos propios la merma de recursos de origen nacional a transferir a todos los municipios de la provincia en el marco de los acuerdos fiscales suscriptos originalmente con los mismos y, por ello, se impone una readecuación que conduzca a la suscripción de nuevos acuerdos ajustados a los niveles de ingresos que se derivan de la Addenda referida, en el marco de lo dispuesto por el artículo 10º de la Ley Nº 4.989 y del artículo 4º del acuerdo que instrumenta dicha Addenda.

Que, dadas las restricciones en materia financiera que soporta la provincia como consecuencia de la merma de recursos girados por el gobierno nacional y mientras dure la emergencia, se hace absolutamente necesario centralizar en el Poder Ejecutivo y su gabinete de ministros, las decisiones de inversión fundamentalmente en lo que respecta a las contrataciones de obras y servicios públicos, a fin de garantizar se prioricen aquellas cuyas evaluaciones arrojen la mayor rentabilidad social, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 4968 de Inversión Pública.

Que resulta necesario procurar, por todos los medios posibles, el incremento del recupero de la cartera de créditos del Instituto Provincial de la Vivienda, a fin de preservar el derecho genuino a obtener una vivienda digna mediante el reciclaje de esos fondos en nuevos planes de obras.

Que el Poder Ejecutivo de la provincia está facultado para el dictado del presente instrumento en virtud de lo previsto por el artículo 149º de la Constitución Provincial.

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA

Art. 1°.- Dispónese que los responsables de las dependencias de la Administración Pública provincial centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, Obra Social de los Empleados Públicos, Banco de Catamarca residual, Administración General de Juegos y Seguros y todo otro ente empresa o sociedad en que el Estado provincial tenga participación mayoritaria, que se ocupen para su funcionamiento inmuebles, muebles y servicios en locación, -en un plazo no mayor de treinta días contados desde la publicación del presente instrumento-, deberán renegociar los contratos respectivos a fin de ajustar su ejecución a las disponibilidades financieras del Tesoro provincial y conforme a una pauta de reducción que no será inferior al trece por ciento (13%) de los precios pactados originalmente, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 4.989, prorrogada por Ley N° 5.053.

Art. 2°.- Encomiéndase al Gabinete provincial, la formulación de un proyecto de transformación y modernización de la organización y las estructuras dependientes del Poder Ejecutivo, inspirado en el propósito de entregar servicios públicos de alta calidad a la ciudadanía, propendiendo a la mayor satisfacción del interés general posible y a la igualdad de oportunidades. Los tópicos principales de este proyecto, se orientarán a una gestión transparente, eficaz y eficiente y al fortalecimiento de la capacidad de regulación y de la evaluación del cumplimiento de objetivos y resultados. Un lugar preponderante deberá asignarse a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas de la gestión pública orientada a proveer mejores servicios a la ciudadanía.

A este efecto, todos los ministerios y secretarías de Estado y reparticiones descentralizadas del Poder Ejecutivo presentarán, hasta el día 2 de Enero de 2002, las propuestas de refuncionalización de las respectivas áreas, ajustadas, además, a las disposiciones del Decreto N° 506/01.

Art. 3°.- Prohíbese a los responsables de las dependencias de la Administración Pública provincial centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, Obra Social de los Empleados Públicos, Banco de Catamarca residual, Administración General de Juegos y Seguros y todo otro ente empresa o sociedad en que el Estado provincial tenga participación mayoritaria, celebrar contratos de locación de obra sin autorización previa del Ministerio del área respectiva o de aquel a través del cual se relacionen con el Poder Ejecutivo. Los contratos de locación de obra sólo se justificarán por una necesidad objetiva, adecuadamente fundada por el funcionario que la invoque y cuando se trate de obtener un resultado solamente asequible a través de competencias técnicas específicas aplicadas a determinado propósito de gestión pública, y para cuyo logro el Estado provincial no cuente con los recursos humanos del perfil adecuado.

Dispónese que los organismos dependientes de la administración central, organismos descentralizados y entidades autárquicas dependientes del Poder Ejecutivo provincial, informen a la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública de todas las contrataciones de personas realizadas en virtud de Contratos de Locación de Obra. Dicho informe será presentado a esa Subsecretaría, dentro de los tres días posteriores a la notificación o publicación del presente instrumento. En lo sucesivo, tales contrataciones serán puestas en conocimiento de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a su celebración, adjuntándose la copia de los instrumentos respectivos.

Art. 4°.- Encomiéndase a los Ministerios de Gobierno y Justicia y de Hacienda y Finanzas, readecuar los acuerdos fiscales firmados oportunamente con los municipios de la Provincia para el saneamiento de las finanzas municipales. De tales readecuaciones, solo podrán derivarse compromisos de transferencias compatibles con la realidad económico financiera del Estado provincial, con arreglo a la Segunda Addenda al Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal suscripto entre éste y el Estado nacional con fecha 8 de Noviembre de 2001, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10° de la Ley N° 4.989, prorrogada por la Ley N° 5.053.

Asimismo, autorízase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a comprometer, en los nuevos acuerdos a que se refiere este artículo, la entrega de bonos de cancelación de deudas autorizadas por la Ley N° 5.016, o instrumentos similares, en cuanto sean requeridos por las municipalidades para la cancelación de sus obligaciones.

Art. 5°.- Dispónese, en orden a garantizar la debida cobertura de las prioridades sociales en materia de inversión pública, y mientras dure la emergencia, que todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial, centralizados, descentralizados y entes autárquicos, deberán elevar para conocimiento y autorización expresa de este Poder Ejecutivo, todos los contratos de suministro y de obras y servicios públicos que superen la suma de cincuenta mil pesos (\$ 50.000.-) por todo concepto. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, todas las contrataciones de obras y proyectos de inversión pública que se eleven para autorización, deberán contar con informe favorable del Sistema de Inversión Pública provincial y figurar en el informe anual de pertinencia técnica del mismo, regido por la Ley N° 4.968 y su Decreto reglamentario N° 1.190/00. Toda contratación que quede comprendida en las disposiciones del presente artículo y se aparte de este procedimiento, será nula de nulidad absoluta y en ningún caso generará derecho a crédito alguno en contra del Estado provincial, siendo responsable, en su caso, con su patrimonio personal, el funcionario que produjere la contratación.

Art. 6°.- Ordénase al Instituto Provincial de la Vivienda, a presentar un plan de gestión de la cartera de créditos en mora de ese Instituto, que se proponga lograr un porcentaje de recuperación no inferior al sesenta por ciento del importe de las cuotas facturadas mensualmente, hasta el 31 de Julio de 2002 y del setenta y cinco por ciento hasta el 31 de Diciembre de 2002.

Art. 7°:- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.-

Dr. OSCAR ANIBAL CASTILLO

Gobernador de Catamarca

Dr. Pedro Rodolfo Casas

Ministro de Gobierno y Justicia

a/c Ministerio de Cultura y Educación

Lic. Jorge Alberto Greco

Ministro de Hacienda y Finanzas

Ing. Agr. Ernesto Mario Alvarez Morales

Ministro de Producción y Desarrollo

Dr. Miguel Angel Córdoba

Ministro de Salud y Acción Social

Dr. Ricardo Gaspar Guzmán

Ministro de Coordinación